



## ¿En la actualidad, el principio de presunción de inocencia está dotado de plena vigencia y operatividad en el sistema de justicia penal acusatorio mexicano?

Is the principle of the presumption of innocence currently fully valid and operational in the Mexican accusatory criminal justice system?

Manuel Othón Martínez Caudillo\*

Recibido: 01-08-2023

Aceptado: 29-11-2023

### Resumen

La presunción de inocencia es una garantía del imputado y uno de los pilares del proceso penal acusatorio, que permite a toda persona un estado de no autor mientras no se expida una resolución judicial firme. La afirmación que toda persona es inocente mientras no se declare judicialmente su responsabilidad, es una de las más importantes conquistas en los últimos tiempos en materia procesal penal. El estado jurídico de presunción de inocencia es uno de los elementos esenciales que integran al garantismo procesal. La reforma constitucional de 2008 en el sistema de justicia penal, en

materia de derecho penal y derechos humanos, se realizó con el propósito de lograr una transición de un sistema tradicional inquisitivo, escrito y privado, a un sistema acusatorio oral y público, mediante la actualización de normas a la propia Constitución, así como a las normas de los códigos o reglamentos que permitan y garanticen el cumplimiento de nuestra Constitución. Es por eso, que el planteamiento del problema radica en que, a pesar de que las reformas al sistema de justicia penal en la Constitución y en los reglamentos son muy claras y precisas respecto a la presunción de inocencia, se hace una mala interpretación de ellas, ocasionando que en la práctica procesal se cometan errores de actuar conforme al anterior sistema inquisitivo, lo cual conlleva a que no se respete la inocencia del imputado debido a que lo tratan como culpable y no como inocente. Esta investigación se realizó con el fin de analizar cómo la presunción de inocencia es vulnerada en el sistema de justicia penal acusatorio mexicano por diversos factores, como lo son: la indebida interpretación de las leyes; la indebida

#### Cómo citar

Martínez Caudillo, M. O. ¿En la actualidad, el principio de presunción de inocencia está dotado de plena vigencia y operatividad en el sistema de justicia penal acusatorio mexicano?. *Constructos Criminológicos*, 4(6). Recuperado a partir de <https://constructoscriminologicos.uanl.mx/index.php/cc/article/view/57>

\*<https://orcid.org/0000-0002-3136-382X>  
Universidad Autónoma de Nuevo León

interpretación de las antinomias y lagunas en las leyes; prisión preventiva y prisión preventiva oficiosa; detenciones arbitrarias; y medios de comunicación. En la elaboración de esta investigación cualitativa se aplicó el método teórico-documental a través de instrumentos como la exploración y análisis documental.

**Palabras clave:** *Presunción de inocencia; garantismo; debido proceso; vulnerabilidad; prisión preventiva.*

### Abstract

The presumption of innocence is a guarantee of the accused and one of the pillars of the accusatory criminal process, which allows any person a state of non-author until a final judicial decision is issued. The affirmation that every person is innocent until his responsibility is judicially declared, is one of the most important achievements in recent times in criminal procedural matters. The legal status of presumption of innocence is one of the essential elements that make up procedural guarantees. The constitutional reform of 2008 in the criminal justice system, in criminal law and human rights, was carried out with the purpose of achieving a transition from a traditional inquisitorial system, written and private, to an oral and public accusatory system, by updating norms to the Constitution itself, as well as to the norms of the codes or regulations that allow and guarantee compliance with our Constitution. That is why the approach to the problem lies in the fact that, even though the reforms to the Criminal Justice System in the Constitution and in the regulations are very clear and precise regarding the presumption of innocence, they are misinterpreted, causing procedural practice

to make mistakes in acting in accordance with the previous inquisitorial system. This means that the innocence of the accused is not respected because they treat him as guilty and not as innocent. This investigation was carried out to analyze how the presumption of innocence is violated in the Mexican Accusatory Criminal Justice System due to various factors, such as: the improper interpretation of the laws; the misinterpretation of antinomies and loopholes in laws; pre-trial detention and informal pre-trial detention; arbitrary detentions; and media.

**Palabras clave:** *Presumption of innocence; guarantee; due process; vulnerability; preventive detention.*

### 1. INTRODUCCIÓN.

La presunción de inocencia del imputado es considerada como un principio rector del proceso penal, de ineludible observancia por la autoridad judicial principalmente, y por aquellas otras autoridades encargadas de la persecución del delito. La persona imputada de infracción penal debe ser considerada como inocente en tanto que la autoridad judicial, dentro de un proceso penal, no establezca que es responsable mediante una sentencia o resolución que cause firmeza ejecutoria.

La presunción de inocencia es una garantía del imputado y uno de los pilares del proceso penal acusatorio, que permite a toda persona un estado de no autor mientras no se expida una resolución judicial firme. En México, la afirmación que toda persona es inocente mientras no se declare



judicialmente su responsabilidad, es una de las más importantes conquistas en los últimos tiempos en materia procesal penal.

La presunción de inocencia significa, primero, que nadie tiene que construir su inocencia; segundo, que solo una sentencia declara esa culpabilidad jurídicamente construida, que implica la adquisición de un grado de certeza; tercero, que nadie puede ser tratado como culpable, mientras no exista esa declaración judicial; y cuarto, que no puede haber ficciones de culpabilidad; la sentencia absolverá o condenará, no existe otra posibilidad (Cubas Villanueva, 2006).

El estado jurídico de presunción de inocencia es uno de los elementos esenciales que integran al garantismo procesal. Esta condición de derecho de la persona frente al *ius puniendi* del Estado ha sido tratada por los autores en el estudio del principio de inocencia y de sus repercusiones en los diversos ámbitos de la justicia penal, principio que es fundamento inmediato de otros y que junto con él, conforman una de las principales directrices de un moderno modelo de enjuiciamiento criminal, tal como lo es, la garantía del proceso justo (Revista del Instituto de la Judicatura Federal, 2014).

El presente trabajo aborda aspectos como los antecedentes históricos del principio de presunción de inocencia, para dar a conocer el origen y la evolución de este derecho para valorar la importancia que representa su contenido.

Se describen los conceptos y significados que cada término como tal comprende, con el objetivo de dar un concepto claro de este principio en el ámbito del derecho general y en el campo del derecho procesal penal en particular.

Es preciso resaltar los alcances que el principio de presunción de inocencia denota como tal, para poder delimitar a cabalidad el campo de acción de este. De igual manera se expone, cómo los medios de comunicación, la prisión preventiva y la prisión preventiva oficiosa vulneran este principio; tal vulneración cada vez es más frecuente y debido a esto, es común que se pase por alto por una mala interpretación de las leyes.

## 2. JUSTIFICACIÓN.

Esta investigación, se realizó con el fin de analizar, cómo la presunción de inocencia es vulnerada en el sistema de justicia penal acusatorio mexicano por diversos factores, como lo son: la indebida interpretación de las leyes; la indebida interpretación de las antinomias y lagunas en las leyes; prisión preventiva y prisión preventiva oficiosa; detenciones arbitrarias; y medios de comunicación.

## 3. ANTECEDENTES HISTÓRICOS.

Los antecedentes de la presunción de inocencia se remontan al Derecho Romano (VIII a. C.-VI d.C.), sin embargo, cobró mucho auge cuando Cesare Bonesana publica en 1764 su tratado “De los delitos y de las penas”.

Al enfrentarse a un sistema penal arbitrario, Beccaria planteó que, si la sociedad tenía el derecho de castigar las transgresiones cometidas en su contra, los castigos y las formas de determinar su imposición debían ajustarse a la gravedad de la conducta, entendida en términos del daño ocasionado a las personas; en la eficacia de la pena elegida para prevenir futuros delitos; las distinciones entre la actividad judicial y las facultades de los otros poderes del Estado; y los derechos inherentes del individuo juzgado. En este orden de ideas, propuso tanto racionalizar el catálogo de delitos y sus correspondientes penas, como resguardar ciertos principios procesales, incluyendo la presunción de inocencia, sobre la cual escribió:

“Un hombre no puede ser llamado reo antes de la sentencia del juez, ni la sociedad puede quitarle la pública protección sino cuando esté decidido que ha violado los pactos bajo los que le fue concedida” (Revista del Instituto de la Judicatura Federal, 2014).

La presunción de inocencia se vio reflejada en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobada por la Asamblea Nacional Francesa en 1789, cuyo artículo noveno establece que toda persona se presume inocente hasta que sea declarada culpable y gozará de la protección de la ley en contra de afectaciones innecesarias a sus derechos en el marco de la detención.

Transcurrieron veinticinco años, para que, del otro lado del Atlántico, en el

Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana de 1814 se estableciera en su artículo 30:

...Todo ciudadano se presume inocente, mientras no se declare culpado. En otros de sus artículos consagraba el derecho a ser oído (derecho de audiencia); prohibía las detenciones sin fundamento y las restricciones innecesarias de derechos durante la detención preventiva; y establecía que se decretaran solo aquellas penas muy necesarias, proporcionadas a los delitos y útiles a la sociedad....

Siendo una idea inherente al ser humano, considerado como un ser social, la importancia de la inocencia se ha manifestado en diversas épocas de la humanidad. El jurista romano Ulpiano (años 170 a 228 d. C.) quien definió la justicia como la continua y perpetua voluntad de dar a cada uno lo que le corresponde. Uno de sus preceptos fundamentales fue:

*“No dañar a nadie.* Quien se abstiene de la conducta prohibida por las leyes obedece al precepto de no hacer daño a nadie, siendo justo. La alteración del justo equilibrio que lesiona los afectos, la persona y sus bienes, es decir, importa una lesión en sus derechos, obliga al restablecimiento del orden agredido”.

De donde deriva una de sus tantas recopilaciones:

“Es preferible dejar impune el delito de un culpable que condenar un inocente”.



El sistema de justicia en la Edad Media estaba sustentado en la represión, que era el resultado de las ambiciones de poder absoluto de unos cuantos; las garantías de los acusados eran muy pobres; los gobernantes carecían de prejuicio aceptando pruebas ilegales y torturando indiscriminadamente para obtener la confesión. Al acusado, no se le veía como sospechoso, sino que se le consideraba y trataba como culpable; era el acusado quien debía demostrar su inocencia. En Francia, al finalizar la época de la inquisición en 1670 se dictó una nueva orden con el siguiente párrafo: “Todos se presumen buenos mientras no se pruebe que son malos”.

Los pensamientos de Montesquieu, Voltaire y Rousseau durante la Revolución Francesa (1789-1799), sustentaron ideológicamente al movimiento armado y se plasmaron en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente Francesa en 1789. En dicho texto no podía faltar la presunción de inocencia, como fundamento de reivindicación del pueblo ante el Estado. El artículo 9 de la Declaración del Hombre y del Ciudadano menciona: “*Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable*” (“Todo hombre se presume inocente hasta que haya sido declarado culpable”).

La influencia internacional, fue relevante para que se dieran estos cambios legislativos, pues hasta antes de la reforma constitucional en materia de justicia penal y seguridad pública de 2008, la presunción

de inocencia se encontraba expresa en los tratados internacionales en los que México forma parte en materia de derechos humanos. Asimismo, resoluciones tomadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como los casos Cabrera García y Montiel Flores en contra del Estado Mexicano cambiaron los paradigmas que prevalecían en ese tiempo (León Delgado, 2014-2015).

#### **4. BREVE APROXIMACIÓN DEL MARCO JURÍDICO.**

Antes de que se llevara a cabo la reforma constitucional del sistema de justicia penal de 2008, el derecho a la presunción de inocencia tenía reconocimiento en interpretaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y es a partir de ello que se establece con carácter fundamental en el artículo 20, apartado B, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (León Delgado, 2014-2015).

El 10 de junio de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la reforma constitucional en derechos humanos y sus garantías, la cual vino a reforzar su observancia y alcances ante toda autoridad.

En este sentido, en el artículo 1º constitucional se establece que todo individuo goza de las garantías derivadas de esta ley y no pueden restringirse ni suspenderse sino en los casos y con las condiciones estipuladas en la propia Constitución.



Encontrando un contenido al precepto constitucional citado, en el artículo 14 constitucional establece la garantía del debido proceso y expresa otras restricciones para privar a cualquiera de derechos. De la misma manera en los artículos 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23 y 102 constitucionales, se advierten los aspectos ineludibles para privar o molestar a alguien.

Alineado al espíritu constitucional, el artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que “toda persona se presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el Órgano jurisdiccional, en los términos señalados en este Código.

Por último, el artículo 11.1 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, dispone que “toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa” (León Delgado, 2014-2015).

## 5. EL GARANTISMO DE LUIGI FERRAJOLI.

Una de las materias que mayor dimensión ha ocupado y sigue ocupando en el conjunto de la teoría jurídica de Luigi Ferrajoli es el derecho penal. Para Ferrajoli es en este

campo donde se juega su legitimación el Estado constitucional de nuestros días, pues es ahí donde se enfrentan en toda su crudeza y toda su violencia el Estado y el individuo (Ferrajoli, 2006).

La idea de un derecho penal mínimo, y de la correspondiente cultura jurídica garantista que ofrezca un soporte teórico y discursivo —tedioso—, no encuentra muchos adeptos en el México de nuestros días —aunque tampoco en otros países—. Tal parece que, lejos de las indicaciones del sistema penal garantista construido por Ferrajoli en muchos de sus trabajos, las autoridades mexicanas de todos los niveles y de todos los poderes parecen seguir empeñadas en continuar con una absurda carrera hacia el incremento de las penas y hacia la inflación de los catálogos delictivos.

La ideología que está detrás de todo el sistema filosófico de Ferrajoli es el garantismo. El garantismo es una ideología jurídica, es decir, una forma de representar, comprender, interpretar y explicar el derecho. Su difusión se debe sobre todo a la obra del propio Ferrajoli, quien a partir de 1989 ha construido una completa y muy estructurada teoría del garantismo aplicado a la materia penal.

El garantismo tiene por noción central o articuladora precisamente la de “garantía”. Ferrajoli define en términos generales a una garantía como “cualquier técnica normativa de tutela de un derecho subjetivo”.

Aunque el concepto de garantía tiene un origen vinculado al derecho civil, en el que existen garantías de tipo real y personal, su utilización se ha extendido a otras ramas del derecho y en particular al derecho constitucional.

El garantismo en materia penal corresponde con la noción de un derecho penal mínimo, que intenta poner fuertes y rígidos límites a la actuación del poder punitivo del Estado.

Esta vertiente del garantismo se proyecta en garantías penales sustanciales y garantías penales procesales. Entre las garantías sustanciales se encuentran los principios de estricta legalidad, taxatividad, lesividad, materialidad y culpabilidad. Entre las garantías procesales están los principios de contradicción, la paridad entre acusación y defensa, la separación rígida entre juez y acusación, la presunción de inocencia, la carga de la prueba para el que acusa, la oralidad y la publicidad del juicio, la independencia interna y externa de la judicatura y el principio del juez natural.

Las garantías penales sustantivas tienen por objetivo la averiguación de la verdad jurídica, a partir de la verificabilidad y refutabilidad en abstracto de la hipótesis de la acusación. Las garantías penales procesales tienen por objetivo la averiguación de la verdad fáctica (Ferrajoli, 2006).

Es claro que, si atendemos a los postulados sobre el derecho penal mínimo de nuestro autor, tendríamos que hacer una revisión profunda de nuestras disposiciones penales,

tanto las que figuran en la Constitución como las que se encuentran en los códigos penales e incluso las que observamos en la jurisprudencia.

Así, por ejemplo, deberíamos limitar a su mínima expresión desde el propio texto constitucional a la prisión preventiva, que vulnera la presunción de inocencia y supone un sacrificio desproporcionado de la libertad de un individuo que no ha sido declarado culpable de algo.

Como lo señala el propio Ferrajoli, “El imputado debe comparecer libre ante sus jueces, no sólo porque así se asegura la dignidad del ciudadano presunto inocente, sino también —es decir, sobre todo— por necesidades procesales: para que quede situado en pie de igualdad con la acusación; para que después del interrogatorio y antes del juicio pueda organizar eficazmente sus defensas; para que el acusador no pueda hacer trampas, construyendo acusaciones y manipulando las pruebas a sus espaldas”

Para que la presunción de inocencia y la minimización de la prisión preventiva sean efectivas, se deben encontrar fórmulas de redacción del texto constitucional que hagan que tales principios no queden sujetos al arbitrio del legislador, ya que con ello se estaría anulando el principio de supremacía constitucional.

No haría falta decirlo, si no fuera porque ese es justamente el caso del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que deja a la ley la

determinación de los “delitos graves”; las personas acusadas por esos delitos no tienen derecho a la libertad caucional y deben enfrentar el proceso penal en prisión.

Es decir, el artículo 20 permite la aludida libertad caucional, pero traspasa al legislador la facultad de determinar los casos en los que se puede negar. No parece una norma muy congruente con el modelo de derecho penal garantista (Ferrajoli, 2006).

## 6. DEBIDA INTERPRETACIÓN DE LAS LEYES.

Si observamos cómo se utiliza el verbo interpretar, nos percataremos de que todos tenemos más o menos una idea de la actividad que despliega el sujeto que realiza la acción (Mantilla Espinoza, 2009).

Si se trata de un juez, éste debe cotejar los hechos, presentados y probados en el proceso, con los supuestos de hecho de los textos normativos con el fin de aplicar la sanción correspondiente. Si se trata de un abogado, éste se esforzará por presentar al juez las normas jurídicas que correspondan a los hechos aportados al proceso de forma tal que favorezcan los intereses de su cliente.

Siempre que hablamos de interpretar el Derecho legislado, partimos del supuesto de su expresión en lenguaje escrito, es decir, en puntos y líneas a los cuales, mediante intencionalidad colectiva, se le atribuye una función simbólica. La conexión entre el símbolo y lo que él representa es establecida por seres humanos —representación convencional— y no existe, una relación necesaria entre esto y aquel.

Cuando se pretende descubrir el significado de una expresión del discurso jurídico, solo se puede estar haciendo referencia a una de estas dos posibilidades: 1) el significado que efectivamente quiso poner en la norma la autoridad que la sancionó; o 2) el significado que en contextos y situaciones semejantes le acuerda hoy el uso lingüístico preponderante, ya sea en la comunidad como un todo, o en algún sector de ella a cuyos usos lingüísticos se atribuye un carácter privilegiado —por ejemplo los jueces— (Mantilla Espinoza, 2009).

Uno de los problemas que enfrenta el juzgador al momento de dirimir los conflictos sometidos a su potestad tiene que ver con los alcances interpretativos que debe dar al texto normativo a aplicar o en su caso, de la solides argumentativa que justifique la decisión del fallo, aspectos que generan decisiones inexactas.

Este tipo de situaciones se dan diariamente en el quehacer judicial de los jueces, magistrados y ministros, quienes aplican de manera casi mecánica algún texto normativo y argumentan con la debida fluidez y lógica matemática, pero también incurren en conflictos interpretativos y argumentativos, por ejemplo, cuando un texto lo suficientemente claro se interpreta de manera aislada, debiendo ser interpretado en relación con el ordenamiento jurídico donde se encuentra enclavado o cuando con el propósito de establecer las razones que motivan el fallo se incurre en una falacia lógica de petición de principio (Rivas Sandoval, 2015).



El derecho actúa sobre hechos y solo tiene un sentido en relación con ellos, valorándolos y determinando de la forma más adecuada las consecuencias que pueden derivar a los sujetos que lo realizan por sus acciones.

Los textos legislativos constituyen entonces, un presupuesto de la decisión judicial en la medida en la que el juez ha de actuar conforme a los presupuestos establecidos con carácter general y abstracto por la ley. Pero la ley requiere que se determine con precisión su significado, puesto que sólo sabiendo que es exactamente lo que la ley dice, puede ésta ser aplicada a los problemas concretos que demandan la solución jurídica.

La labor de determinación del significado de los textos jurídicos es reconocida con el nombre de interpretación jurídica. Esta constituye, un instrumento imprescindible para poder llevar a cabo la aplicación del derecho (Rivas Sandoval, 2015).

El problema de la decisión jurídica y de la consiguiente entrada en juego de los elementos valorativos, es mucho más amplia. La determinación del significado de la ley constituye, un momento concreto del proceso global que lleva a la decisión judicial. Un momento que en sí mismo, no resume toda la complejidad y las dificultades inherentes al problema.

En este problema están implicados hechos, que también han de ser enjuiciados y precisados. No basta, precisar qué es lo

que dice la norma, sino que también hay que precisar, cuáles han sido los hechos, qué relevancia jurídica tienen, cuál es la clasificación jurídica que merecen desde la perspectiva del ordenamiento jurídico de que se trate y cuáles son las consecuencias que, conforme a derecho, habrán de ser imputadas a la realización de tales hechos.

Al margen de los problemas que presenta la interpretación de los textos legislativos, que sirven para enjuiciar los hechos, también la aplicación del derecho encuentra problemas en relación con los propios hechos. La previa determinación de los hechos supone ya en sí una opción que el órgano judicial habrá de optar conforme a determinados criterios, que garantizan la mayor verosimilitud de la opción aceptada.

Es una opción que, en todo caso, no puede garantizar el acierto del juez, entre otras cosas, porque el criterio adoptado por el juez a este respecto se basa, en muchas ocasiones, en una serie de indicios ajenos a su propia percepción personal; es así, como puede afirmarse con razón que “la verdad jurídica no puede ser fijada por el tribunal al modo que el científico nos propone una verdad física o natural: ante todo, porque el juez no opera directamente sobre los hechos, sino que recibe una información de las partes que es al mismo tiempo redundante y con mucha frecuencia contradictoria, lo que puede provocar una imagen distorsionada de la realidad que en todo caso ha pasado ya por el tamiz de la valoración” (Prieto Sanchís, *Ideología e interpretación jurídica*, 1993).

## 7. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA-PRISIÓN PREVENTIVA: DEBIDA INTERPRETACIÓN DE LAS ANTINOMIAS Y LAGUNAS EN LAS LEYES.

Las antinomias son frecuentes en cualquier Derecho y, es comprensible que así suceda, pues si bien solemos operar con la ficción de la coherencia del orden jurídico, como si éste tuviera su origen único y omnisciente —ficción seguramente conectada a la de la personificación del Estado— lo cierto es que ese conjunto de normas que llamamos derecho positivo es el fruto de actos de producción normativa sucesivos en el tiempo y que responden además a intereses e ideologías heterogéneas.

Por eso, aunque se presente como una patología para el jurista, las antinomias son una consecuencia natural del dinamismo de los sistemas jurídicos y también de un cierto déficit de racionalidad del legislador, pues muchas antinomias podrían evitarse, absteniéndose de dictar normas contradictorias con otras precedentes, eliminando del sistema a estas últimas (Prieto Sanchís, Observaciones sobre las antinomias y el criterio de ponderación, 2011).

Los criterios tradicionalmente utilizados para resolver las antinomias son: el jerárquico, en cuya virtud la ley superior deroga a la inferior; el cronológico, por el que la ley posterior deroga a la anterior; y el de especialidad, que ordena la derogación de la ley general en presencia de la especial.

De los tres criterios enunciados, los dos primeros se muestran inservibles cuando la antinomia se produce dentro de un mismo documento legislativo, pues todos sus preceptos son coetáneos —que existe al mismo tiempo que otra cosa— y gozan del mismo nivel jerárquico. En tales casos, solo resulta procedente observar el criterio de especialidad, concibiendo la norma especial como una excepción a la disciplina prevista por la norma general (Prieto Sanchís, Observaciones sobre las antinomias y el criterio de ponderación, 2011).

Existen razones por las cuales no todas las antinomias se pueden resolver, como lo son cuando no se puede aplicar ninguna de las reglas ideadas para la solución de éstas. A las antinomias que pueden ser resueltas, Norberto Bobbio (1909-2004) jurista, filósofo y politólogo italiano las refiere como aparentes y a las que no se pueden resolver como reales. Las antinomias reales serán aquellas donde el intérprete se limita al criterio de interpretación propio, ya sea por la ausencia de una consideración o un conflicto entre los criterios dados.

En la problemática de las antinomias en el derecho, el único camino debe ser el apego a lo que hemos llamado las funciones esenciales del derecho en la vida social, y éstas son: certeza, seguridad y cambio; resolución de los conflictos de intereses; y organización, legitimación y restricción del poder político (García Murillo, 2007).

Un sistema jurídico puede definirse completo cuando en el mismo a cualquier

caso posible va anexa una consecuencia jurídica, de modo que el órgano jurisdiccional puede siempre encontrar en una norma preexistente la solución de cualquier controversia sometida a juicio.

Para que sea posible el ordenamiento jurídico debe tener una respuesta para cada demanda de la vida social, y ello se logrará si se completa con las nuevas leyes que surgen a raíz del dinamismo de las relaciones sociales, o a través de principios universales del derecho, o aquellos que se encuentran en su interior; sólo así logrará su plenitud, aspiración que continúa latente para todos los legisladores en favor de lograr una correcta aplicación del derecho.

El problema de las lagunas legales deviene en un inevitable inconveniente, tanto para la teoría como para la filosofía del derecho.

Proveniente del latín *lacuna* (*laguna en singular*), la laguna de ley es un vacío jurídico, no existe una disposición legal aplicable al caso concreto; se dice también que existe una laguna de ley cuando se da una imprecisión o falta de claridad en un precepto normativo (Hernández Rodríguez, 2015).

Existen dos tipos principales de lagunas:

- Normativas
- Axiológicas

**Lagunas normativas:** Se encuentra una laguna normativa cuando un supuesto de hecho no está regulado en manera alguna por las normas explícitas existentes en el sistema.

Sin embargo, frecuentemente las fuentes del derecho pueden ser interpretadas en el sentido que el supuesto H no está regulado, pero también en el sentido que tal supuesto H sí está regulado. La primera interpretación produce una laguna, la segunda la evita. En otras palabras, las lagunas normativas no son defectos objetivos del sistema jurídico: dependen de la interpretación, la cual puede crearlas, así como evitarlas (Guastini, 2015).

Una laguna normativa puede ser creada, por ejemplo, de las dos formas siguientes:

1. Usando el argumento a contrario en función interpretativa y rechazando cualquier interpretación extensiva: frente a un conjunto de disposiciones que regulan un conjunto finito, aunque muy amplio, de supuestos de hechos, argumentando a contrario se puede concluir que cualquier supuesto no expresamente incluido en este conjunto no está regulado por ninguna disposición.
2. Usando el argumento de la diferencia o disociación: frente a una disposición que regula la clase de casos H, se puede sostener que tal clase de casos incluye dos subclases, H1 y H2, sustancialmente diferentes, y que la intención de la autoridad normativa era regular una sola de ellas —H1, por ejemplo—, de tal forma que la otra subclase H2 queda carente de cualquier regulación (Guastini, 2015).

Lagunas axiológicas.

Existen dos tipos de lagunas axiológicas:

1. El hecho no regulado por ninguna norma. A veces, un supuesto de hecho no está regulado por ninguna norma, pero según el intérprete, debería serlo. Por ejemplo, el legislador ha otorgado un cierto derecho a una clase de sujetos S1 —los profesores de universidad, supongamos— sin extender el mismo derecho a la clase de sujetos S2 —los profesores de escuelas secundarias—. Al intérprete, sin embargo, las dos clases de sujetos le parecen sustancialmente iguales. Falta entonces una norma que otorgue el mismo derecho a los sujetos S2. O bien, otro ejemplo, el derecho otorga un cierto poder a un órgano del Estado sin establecer ningún límite sustancial a su ejercicio. Al intérprete, sin embargo, no le parece admisible —o razonable— que no existan límites sustanciales a dicho poder. Falta entonces una norma que establezca tales límites.
2. El hecho regulado por una norma. Otras veces, un supuesto de hecho sí está regulado por una norma, pero, según el intérprete, está axiológicamente inadecuada porque el legislador no tuvo en cuenta una distinción que debería haber tomado en cuenta, se supone que el legislador no ha tenido en cuenta la distinción en cuestión por no haberla previsto y que, de haberla considerado, hubiera dado una solución diferente

al supuesto de que se trata. Dicho de otra forma, una laguna axiológica no es un caso sin regulación, sino un caso con una mala regulación. Por ejemplo, el legislador ha otorgado un cierto derecho a todos los profesores sin distinguir entre clases diferentes —los profesores de universidad y los de escuela secundaria—. Al intérprete, sin embargo, las dos clases de sujetos le parecen sustancialmente distintos. Falta entonces una norma que otorgue derechos distintos a una u otra de las dos clases.

Ambos tipos de lagunas axiológicas dependen de juicios de valor del intérprete: es el intérprete que construye valorativamente dichas lagunas. Las del segundo tipo, en particular, se producen precisamente por medio de disociación, es decir, derrotando una norma, de tal forma que dicha norma no se aplique a todos los supuestos de hechos literalmente previstos, sino solo a una subclase de ellos, mientras que la otra subclase queda no regulada por el derecho. Las lagunas normativas y axiológicas se resuelven por medio de normas implícitas que regulan los casos no previstos (Guastini, 2015).

## 8. LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

Los medios de comunicación, así como los periodistas, son pieza importante en una sociedad con democracia. No obstante, es difícil descifrar situaciones tan complicadas como las relacionadas en concordar la

defensa a la libertad de expresión, al debido proceso, el derecho al honor y a la privacidad en estos tiempos donde la principal nota son los supuestos hechos delictivos (León Delgado, 2014-2015).

Infinidad de veces vemos en los noticieros los rostros de personas a las que se les ha imputado algún delito o que han sido detenidas, e incluso personas confesas; pero esto no debería ser así, pues no es razón para que sean exhibidas de tal manera, ya que es una acción que violenta severamente su inocencia creando un estigma a la persona en contra de sus derechos, y tal vez, una de las acciones de la autoridad de mayor impunidad.

Esto no significa que sea ilegítimo mantener informados a los ciudadanos a cerca de los procesos penales. Sin embargo, es de gran importancia tomar las medidas para proteger su integridad personal para no cometer el error de emitir declaraciones a la opinión pública que aludan o hagan referencia de culpabilidad de las personas procesadas o detenidas y que estas dañen, influyan o alteren el resultado del proceso.

Como se mencionamos anteriormente, las autoridades están obligadas a no violentar el principio de presunción de inocencia. No obstante, esta obligación no ha quedado clara para los medios de comunicación, aun cuando existen disposiciones que hacen señalamientos de tal obligación, como sería la Observación General Número 32.

Estas disposiciones no impiden que los medios de comunicación indaguen, busquen

o recopilen información, así como tampoco pretenden reprimir la libertad de expresión al informar sobre los procesos penales. El conflicto se presenta por la manera en que difunden y presentan la información, ya que debido a eso con frecuencia violentan la presunción de inocencia y la privacidad de quienes se encuentran en un proceso penal (León Delgado, 2014-2015).

En Europa Continental; la privacidad, la dignidad personal y la presunción de inocencia de quienes atraviesan por un proceso penal están protegidos de los medios de comunicación por el derecho de personalidad. Desde este punto de vista, el principio de presunción de inocencia se pondera como un derecho sustancial, el cual se debe respetar por todos de igual manera; y no solo debe ser visto como una regla probatoria únicamente.

Por tal razón, la Corte Europea de Derechos Humanos ha interpretado que toda persona tiene derecho a no ser molestada en público como culpable antes de la sentencia. El Consejo de Europa, haciendo lo propio, emite la Recomendación Rec (2003) 13 del Comité de ministros sobre la difusión de información de los procesos penales a través de los medios de comunicación.

La cual reconoce como un principio el derecho a recibir información sobre la actuación de las autoridades del sistema de justicia penal y, en consecuencia, la facultad de los periodistas y medios de comunicación de informar libremente sobre el funcionamiento del sistema, siempre y



cuando esta información difundida a través de estos medios respete la presunción de inocencia, la exactitud de la información, el acceso de información en condiciones de igualdad para todos los periodistas, la protección a la privacidad, el derecho de réplica, etc.

En el año 2012, la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Distrito Federal expidió la Recomendación 03/201, dirigida a la Procuraduría General de Justicia de la misma entidad por la “exhibición de personas, publicación de su información confidencial, así como la contenida en los expedientes de averiguación previa”. En dicho documento se hace mención, además de otros temas, que el hecho de hacer presentaciones y señalamientos de detenidos ante los medios de comunicación, como autores de los delitos que se les imputa, sin haber sido procesados ni sentenciados, violenta su principio de presunción de inocencia. La Comisión sostuvo que la Procuraduría exhibió a personas y emitió declaraciones de culpabilidad que fueron replicadas por los medios de comunicación antes de que los casos fueran siquiera considerados por un juez. Más tarde resultó que varias de las personas exhibidas fueron liberadas por no haberse comprobado su culpabilidad durante el procedimiento penal (León Delgado, 2014-2015).

Los códigos éticos de autorregulación existen, pero su efectividad depende de la voluntad de los medios que los suscriben. Un ejemplo de esto es el Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia,

que fue firmado por diferentes medios de comunicación del país, el cual señala como criterio editorial el no prejuzgar culpables según el inciso 5.

Las autoridades siempre tratan de aparentar que realmente hacen su trabajo en contra del crimen organizado al presentar en los medios de comunicación a detenidos, violentando con esto su presunción de inocencia. Estos medios deberían estar preparados, educados y capacitados para manejar siempre esta información bajo el supuesto de que los detenidos presentados ante ellos son inocentes en cuanto no cuenten con una sentencia condenatoria.

Asimismo, los medios deberían recibir información oportuna, objetiva y veraz sobre las detenciones y, de igual manera sobre las investigaciones del gobierno sobre la delincuencia organizada (León Delgado, 2014-2015). Sin embargo, las personas detenidas siguen siendo presentadas ante los medios de comunicación y las autoridades, ya sean del fuero común o federal siguen difundiendo información de los detenidos o imputados, causando que esto se vuelva una situación común y ordinaria.

Con el actual sistema de justicia penal acusatorio, se otorga una variedad de estímulos favorables para el derecho a la información y la libertad de expresión, ya que, si hablamos del principio de publicidad, este permite que sean observadas las actuaciones de las instituciones y que se conozca el estado del proceso penal. De esta manera, cualquier situación de secreto

del proceso permitirá despertar sospechas, excepto en los casos en los que la ley protege la privacidad de las personas que son procesadas.

El principio de presunción de inocencia debería ser visto y utilizado por los medios de comunicación y las instituciones como una norma reglamentaria que delimite la libertad de expresión, el derecho a la información, el debido proceso y los derechos a la personalidad; tomando siempre como medida de acción la dignidad de las personas (León Delgado, 2014-2015).

## **9. PRISIÓN PREVENTIVA VS PRESUNCIÓN DE INOCENCIA.**

Como analizamos con anterioridad, aludiendo a las antinomias y lagunas de leyes, el principio de presunción de inocencia supone tratar al imputado como inocente hasta en tanto no esté demostrado que es culpable; en estricto sentido, consiste en que permanezcan íntegros los derechos del imputado hasta que no esté plenamente justificado el derecho del Estado a afectar tales derechos (Rivera Rodríguez, 2016).

La necesidad de las medidas cautelares, entre ellas la prisión preventiva, surge desde el inicio del procedimiento. Durante el proceso deviene imperioso para el Estado implementar cierta cautela para asegurar a su vez los derechos de otros intervinientes en el proceso —denunciantes, ofendidos, víctimas, entre otros— así como para adherir al procedimiento al imputado, evitando que éste se sustraiga de la acción de la justicia.

A raíz de una imputación derivada de una denuncia o querrela la autoridad debe asumir la presunción de inocencia del señalado, lo cual debe subsistir hasta que exista una declaración firme de culpabilidad.

Entre las medidas cautelares, sin duda, la más gravosa es la prisión preventiva, pues conlleva el encarcelamiento del imputado durante el tiempo que dure el proceso para resolver si es o no responsable, lo cual no deja de contravenir el alcance del principio de presunción de inocencia en los términos que ha sido planteado anteriormente en este proyecto (Rivera Rodríguez, 2016).

La prisión preventiva es una institución rudimentaria —aplicada de forma generalizada—, que es propia de sociedades atrasadas social y culturalmente, en materia de protección de derechos humanos, en las cuales son escasas las posibilidades de control sobre las personas y las funciones de policía son débiles; en ese sentido, la prisión preventiva solo puede ser admitida en un Estado democrático de derecho, cuando se trata de una medida verdaderamente excepcional, reservada para aquellos casos que por su extrema gravedad y alto grado de riesgo para los bienes y derechos de las personas justifiquen su imposición.

En la actualidad, el uso de tecnología —localizadores electrónicos— asociados a otras medidas, como el arraigo domiciliario o la prohibición de acudir a lugares determinados, se muestran como una auténtica alternativa; empero, aún debe discutirse si la prisión preventiva debe

extinguirse o quedar reservada para aquellos casos de delitos de alto impacto social o riesgo grave para las víctimas (Rivera Rodríguez, 2016).

La utilización de la prisión preventiva debe ser la última ratio, esto es, una excepción en casos de urgencia, de manera provisional hasta que sobrevenga la acción judicial con celeridad; además de que garanticen la defensa del imputado desde su detención. Como su utilización es el resultado del ineficiente actuar del Ministerio Público y la policía durante la investigación, se han multiplicado las justificaciones para su uso en caso de flagrancia, cuasi flagrancia, presunción de flagrancia y flagrancia equiparada, abriendo la posibilidad al aumento de violaciones de los derechos humanos con las detenciones discrecionales (Insyde, 2013).

El sujeto que se ve sometido a prisión preventiva y que luego es absuelto ha sufrido un daño que debe ser indemnizado. Tal es la opinión de Javier Llovet Rodríguez director de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Costa Rica, quien además argumenta que “Dicho daño no es solo material —por ejemplo, los ingresos dejados de percibir mientras se permanecieron en prisión—, sino que principalmente es un daño moral. El Dr. Llovet agrega a respecto, citando a Hugo Alfonso Muñoz Decano del Colegio de Abogados de Cajamarca en Perú, que “el daño moral, social y hasta físico y las condiciones en que queda el detenido inocente y sus familiares, constituyen formas de degradación muy serias que el Estado

debe, si no evitar, mediante un trato especial a los procesados, sí al menos compensar, indemnizando a aquellas personas, que a pesar de su inocencia han pasado meses y hasta años en cárceles, sin razón alguna” (Rodríguez Belmares, 2003).

Debido a esto, es necesario que se tomen nuevas medidas cautelares —existen otras que son más afines a la presunción de inocencia— para que la aplicación de la prisión preventiva sea sólo después de una debida y correcta investigación, y así evitar tantos daños a las personas sometidas a dicha medida cautelar; de la misma manera, ya no incrementar desmedidamente el número de detenidos en prisión preventiva en los centros penitenciarios sin haber recibido una sentencia condenatoria.

#### **10. PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA, CONTRADICTORIA A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO EN MÉXICO.**

Con la reforma al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de prisión preventiva, se modificó su párrafo segundo, dicha modificación señala que el juez ordenará los delitos que sí dan lugar a prisión preventiva, estos delitos, de acuerdo a esta reforma, son los considerados como graves y que forman parte de un catálogo de delitos como son los de delincuencia organizada, el homicidio doloso, la violación, el secuestro, los delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, los delitos contra la salud, los delitos contra la seguridad de



la nación y aquellos que atenten contra el libre desarrollo de la personalidad (León Galán, 2017).

Uno de los puntos convenientes de esta reforma, es el mejoramiento a la prisión preventiva, en comparación con lo que anteriormente se hacía, ya que ahora se aplica solamente en los delitos graves y no como regla general. Sin embargo, esto no impide que esta medida cautelar siga siendo violatoria de los derechos humanos, por lo que su justificación debe ser siempre necesaria y debidamente acreditada por el Ministerio Público. Recordemos la naturaleza *ad cautelam* que debe inspirar a la privación de la libertad aludida.

Es importante hacer mención, que como resultado de esta reforma al artículo 19 de nuestra Constitución, se origina la prisión preventiva oficiosa, la cual establece que el juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de delitos graves, sin embargo, esto provoca que su aplicación en el proceso jurídico sea ahora la regla general, convirtiéndola en una de las principales causas de violación del principio de presunción de inocencia, en nuestro actual sistema de justicia penal acusatorio.

La prisión preventiva oficiosa al parecer resulta contradictoria a la misma Constitución, pues señala en su artículo 19, específicamente en el párrafo segundo, los casos en los que el juez ordenará dicha medida cautelar; mientras que el artículo 20 constitucional, apartado B, sección I,

señala que se debe presumir la presunción de inocencia del imputado (León Galán, 2017).

Por otro lado, en relación con la prisión preventiva oficiosa, el doctrinario Julio Hernández Pliego (1937-2017) doctor en derecho fundador de la Sociedad Mexicana de Criminología, señala que es una medida cautelar de privación de la libertad impuesta con el ánimo de garantizar la asistencia del imputado o impedir algún perjuicio a la víctima o testigos, la cual se aplica de forma automática por parte del juez en virtud de un catálogo previo de delitos, para los cuales es precedente.

Esta medida cautelar, de reciente creación para todo aquel a quien se le impute un delito, priva del derecho a la libertad, viola los derechos humanos y vulnera el principio de presunción de inocencia. Sin embargo, con esta nueva disposición, el Ministerio Público está obligado a justificar su petición de prisión preventiva, pero si el delito cometido fuera de los considerados graves, esta justificación no sería necesaria, pues sería impuesta automáticamente por el juez.

El Dr. Daniel R. Pastor, argentino, Doctor en derecho penal, considera que “la prisión preventiva funciona como una pena anticipada” sin cumplir función procesal alguna quien describe de la siguiente forma y de manera sintetizada los requisitos que deben cumplirse para una legítima prisión preventiva.

“Según el primer y principal presupuesto de la prisión preventiva, la adopción de la medida cautelar debe constatar indispensablemente que la libertad del imputado significa un riesgo comprobado para los fines del proceso. El hecho punible atribuido al imputado, por lo demás, debe estar demostrado con un grado de alta probabilidad (mérito sustantivo): el inculcado, antes de ser puesto en prisión preventiva debe haber tenido la oportunidad de conocer el hecho imputado y las pruebas existentes en su contra, y de ofrecer un descargo acompañado de pruebas o solicitudes probatorias (derecho de audiencia y de resistencia). La medida sólo deberá ser adoptada si la amenaza es cierta para los fines del proceso constituida por la libertad del imputado, no puede ser neutralizada efectivamente de un modo menos agresivo para los derechos fundamentales de éste (subsidiaridad)” (León Galán, 2017).

Ferrajoli, sostiene ante esto que:

“El imputado debe comparecer libre ante sus jueces, no solo porque así se asegura la dignidad del ciudadano presunto inocente, sino también por necesidades procesales: para que quede situado en pie de igualdad con la acusación; para que después del interrogatorio y antes del juicio oral pueda organizar eficazmente sus defensas; para que el acusador no pueda hacer trampas, construyendo acusaciones y manipulando las pruebas a sus espaldas”.

Por lo anterior, existe incongruencia entre la reforma constitucional de 2008 y los tratados internacionales, con relación al respeto al principio de presunción de inocencia, pues contempla a un determinado número de delitos considerados como graves, en lo que debe ordenarse la prisión preventiva oficiosa en México.

Por tanto, y en consecuencia a esta incongruencia, existe como hemos señalado supra, una contradicción o antinomia constitucional, ya que la prisión preventiva oficiosa y el principio de presunción de inocencia, son entes jurídicos que gozan de la misma jerarquía dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se contraponen entre sí en nuestro actual y reformado sistema de justicia penal acusatorio.

El catedrático en filosofía del derecho en la Universidad de Castilla-La Mancha, España, Luis Prieto Sanchís, señala de la contradicción o antinomia que “suele decirse que existe antinomia o contradicción normativa cuando dentro de un mismo sistema jurídico se imputan consecuencias incompatibles a las mismas condiciones fácticas. Por ejemplo, una norma prohíbe lo que otra manda, o permite no hacer lo que otra ordena, etc.”. En otras palabras, no puede cumplir al mismo tiempo lo establecido en dos normas.

Derivado de la reforma constitucional al artículo 19, específicamente su párrafo segundo, la legislación determinó ciertas conductas en las que el juez de control





deberá ordenar la prisión preventiva oficiosa, tales son los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos que la ley determine como graves en contra de la seguridad nacional, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

De esta manera, el juez de control queda en una posición contraria al sistema penal acusatorio garantista; pues esta reforma le ordena directamente, sin permitirle la oportunidad de optar por otra medida cautelar, se apoye en su criterio y determine la posibilidad de que el imputado no se puede sustraer de la acción de la justicia o que no es un riesgo para la sociedad. Esto nos permite comprender que la antinomia entre la prisión preventiva oficiosa y la presunción de inocencia merma la eficiencia del debido proceso en México.

Por mayoría de votos, el Tribunal Pleno acordó que un determinado número de leyes respecto a derechos humanos, tanto constitucionales como convencionales, se originan del artículo 1º constitucional, sin embargo, tales leyes no dejan claro el origen de estos derechos, pues se rigen por principios interpretativos. También reconocen que tales derechos constitucionales, así como los internacionales, poseen el mismo nivel de jerarquía, pues son igualmente efectivos.

Como resultado de esto, determinaron que la reforma constitucional en lo que a derechos humanos se refiere, aumenta el

catálogo constitucional de tales derechos, pues en el momento en que están en igualdad las normas nacionales e internacionales también se aumenta la protección de las personas.

Sin embargo, el principio de presunción de inocencia del imputado, se vulnera evidentemente por la prisión preventiva oficiosa; y si a esto agregamos, la contradicción que se da en el momento en que, el Código Nacional de Procedimientos Penales contempla en el artículo 19 constitucional, segundo párrafo, que la prisión preventiva es una medida cautelar de acción inmediata en todo proceso penal; al estar presente esta antinomia, se estaría faltando a las normas internacionales de los tratados en los que México es parte, ya que estas, consideran a la prisión preventiva como la última y más grave medida cautelar que se le debe imponer al imputado.

Por tanto y debido a esta antinomia, es imperante considerar la derogación de la prisión preventiva oficiosa de nuestra Constitución, debido a que tal contradicción no será posible resolver por los criterios de jerarquía, temporalidad y especialidad, sino únicamente mediante la derogación (Prieto Sanchís, Observaciones sobre las antinomias y el criterio de ponderación, 2011).

## 11. CONCLUSIONES.

Atendiendo a la reforma constitucional del Sistema de Justicia Penal, hoy por hoy, el principio de presunción de inocencia

es un derecho humano; dicho principio, garantiza al imputado que se presume en todo momento su inocencia, desde la detención o desde la acusación presentada por el Ministerio Público, así como durante el proceso penal y la culminación de éste, mediante la emisión de una sentencia condenatoria o resolución que cause firmeza.

Este derecho no solo alcanza el ámbito jurisdiccional, sino también la etapa preliminar y la investigación fiscal; este principio influye en el proceso penal, básicamente en lo que respecta a la actividad probatoria; pues es necesario la existencia de pruebas plenas suficientes e idóneas sobre la responsabilidad del imputado.

Es en el proceso penal donde se han evidenciado las mayores violaciones a los derechos fundamentales y particularmente a la libertad y a la presunción de inocencia, estos atropellamientos se dan de forma rutinaria y sistemática a través de la administración de justicia penal y se manifiesta en la gran cantidad de presos que pasan años sin recibir una condena y muchos de ellos cumpliendo una pena anticipada, por un delito que no cometieron.

La presunción de inocencia pese que ha sido elevada a la categoría de un derecho humano, carece de interés o importancia debido a factores exógenos. Dichos factores provienen del arraigo al modelo tradicional inquisitivo, el cual regía al sistema de justicia penal y consistía en someter al imputado a

la culpa, creando con esto una cultura de culpabilidad.

Los medios de comunicación tienen una gran participación e influencia para que este principio se vulnere, por tal razón, estos medios, deberían de regirse por reglamentos que les permita difundir la información de ámbito delictivo con mayor prudencia y responsabilidad.

Es imperante la legislación de normas o leyes que sancionen a quienes violenten el principio de presunción de inocencia, sin embargo, para que esto de buen resultado, es necesario que la población civil reciba una educación que le enseñe el respeto a los derechos humanos, desde sus primeros años de escuela hasta su culminación académica, esto con el objetivo de que conozca sus derechos fundamentales.

La prisión preventiva, afecta considerablemente al imputado; mediante esta medida cautelar, se busca asegurar la asistencia de la persona inculpada al proceso penal y la aplicación de la pena correspondiente. Sin embargo, esta medida precautoria es violatoria de su derecho a la presunción de inocencia.

La prisión preventiva oficiosa ocasiona incongruencia entre las reformas constitucionales y los tratados internacionales, en lo que se refiere al principio de presunción de inocencia, ya que dichos tratados consideran a la prisión preventiva como lo último a lo que se debe someter al imputado.

Es evidente, que existe una antinomia en el sistema de justicia penal mexicano, entre la prisión preventiva oficiosa y el principio de presunción de inocencia, lo cual permite confirmar la vulnerabilidad de los derechos humanos del imputado en el actual y reformado sistema penal acusatorio.

## 12. PROPUESTAS.

A continuación, emitiremos las siguientes propuestas:

1. Elevar el principio de presunción de inocencia a derecho absoluto, ya que son aquellas prerrogativas que se consideran indispensables para que el hombre pueda cumplir normalmente sus fines naturales y sociales, para que de esta forma se sitúe jerárquicamente por encima de la prisión preventiva y de esta manera esta última no limite o vulnere a este principio, pues de no ser así, seguirá permaneciendo una contradicción entre ambas figuras jurídicas.
2. Implementar programas, cursos, evaluaciones y supervisión de carácter obligatorio dirigido a Fiscales o Ministerios Públicos y Policías, para que, en el caso de los primeros, logren desligarse del anterior sistema tradicional inquisitivo; y en el caso de los segundos, puedan comprender y respetar los derechos humanos de cada detenido, para así evitar detenciones arbitrarias o sin fundamento, pues de lo contrario

de nada servirán las reformas que se realicen al sistema penal acusatorio.

3. Aplicar reglamentos o normas más estrictas a los medios de comunicación para evitar que los detenidos sean exhibidos ante sus cámaras y mostrados al público sin haber recibido un proceso y una sentencia, pero sin que esto limite o restrinja la libertad de expresión.
4. Regular mayormente la prisión preventiva para que su aplicación sea necesariamente cuando el Ministerio Público demuestre con un alto grado de convicción y más allá de toda duda razonable que el imputado pudiera sustraerse de la acción de la justicia, ocasionar algún daño a la víctima u ofendido o testigo o poner en riesgo el proceso penal.

## TRABAJOS CITADOS

- Becaria, C. (1988). *De los delitos y las penas*. México: Porrúa.
- Benítez Uribe, O. (2007). *El principio de presunción de inocencia y la probable responsabilidad*. México: Cámara de Diputados.
- Cubas Villanueva, V. (2006). *El Proceso Penal Teoría y Jurisprudencia Constitucional*. Perú: Palestra.
- Ferrajoli, L. (2006). Garantismo penal. *Colección lecturas jurídicas: serie estudios jurídicos*(34). México: Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.
- García Murillo, J. G. (2007). Las Antinomias en el Derecho, El Porque de su Origen y El Cómo de sus Posibles Soluciones. *Letras Jurídicas*, 20-32.
- Guastini, R. (2015). Interpretación y Construcción Jurídica. *Isonomía*(43), 11-48.

- Hernández Rodríguez, M. V. (2015). El problema de las lagunas. Rasgos distintivos y razones de las peculiaridades de las lagunas canónicas. *Anuario de Derecho Canónico*, 149-199.
- Insyde. (2013). Presunción de inocencia. *Cuaderno de trabajo para periodistas en el sistema penal acusatorio*, 12-33.
- Lara Martínez, E. (2015). Los derechos humanos en sistema penal acusatorio adversarial. *Los Derechos Humanos en el Sistema Penal Acusatorio Adversarial*, 275-317.
- León Delgado, E. R. (2014-2015). Los Medios de Comunicación Ante el Derecho Humano de Presunción de Inocencia. *De Jure*, 33-53.
- León Galán, S. d. (2017). *Perspectivas del Derecho*. Veracruz: Universidad de Xalapa.
- Mantilla Espinoza, F. (Diciembre de 2009). "Interpretar": ¿aplicar o crear derecho? análisis desde la perspectiva del derecho privado. *Revista de derecho (Valparaíso)*(33), 537-597. Obtenido de <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-68512009000200015>
- Prieto Sanchís, L. (1993). *Ideología e interpretación jurídica*. Madrid: Tecnos.
- Prieto Sanchís, L. (2011). Observaciones sobre las antinomias y el criterio de ponderación. *Cuadernos de Derecho Público*, 1-22.
- Revista del Instituto de la Judicatura Federal. (enero de 2014). Hacia un proceso penal constitucional:. *Elementos para entender y aplicar la presunción de inocencia en México*. (36), 6. México.
- Rivas Sandoval, F. J. (2015). Escuelas de la teoría de la interpretación y argumentación jurídica. *Revista Iberoamericana de las Ciencias Sociales y Humanísticas*, IV(8), 382-395.
- Rivera Rodríguez, R. (2016). Prisión Preventiva Oficiosa, un problema de interpretación. *Revista del Instituto de la Judicatura Federal*, 152-153.
- Rodríguez Belmares, A. (Marzo de 2003). Análisis de la prisión preventiva. *Tesis*, 97-98. Monterrey, Nuevo León, México.

---

**Manuel Othón Martínez Caudillo**

**Afiliación:** Universidad Autónoma de Nuevo León

Profesor de la UANL doctorado en Criminología